JUZGADO VEINTICINCO CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil veintitrés.

Acción de Tutela No. 110014003 078 2023 00638 01

Resuelve el Juzgado la impugnación a que fue sometido el fallo de tutela proferido el 24 de abril de 2023 por el JUZGADO 78 CIVIL MUNICIPAL hoy 60 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ, dentro de la acción de tutela promovida por LUZ ANDREA LONDOÑO ÁLVAREZ contra SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ.

1. ANTECEDENTES

1.1. La señora LONDOÑO ÁLVAREZ promovió el amparo de su derecho fundamental de petición, y en consecuencia, solicitó que, se ordene a la entidad accionada dar respuesta positiva a su requerimiento, y en virtud del silencio administrativo, proceda a descargar el comparendo que pesa en su contra.

1.2. Como fundamento de sus pretensiones manifestó que, el pasado 28 de febrero de 2023 presentó una solicitud ante el organismo de tránsito accionado, solicitando la *“revocatoria directa – solicitud audiencia virtual tránsito”* a fin de controvertir el comparendo No. 110010000000374660231 del 09 de febrero del año en curso. Sin embargo, al momento de la interposición de la acción de tutela, no había recibido respuesta de su petición.

2. EL FALLO IMPUGNADO

El Juzgador de primera instancia, tras encontrar acreditada la radicación del derecho de petición presentado por la accionante ante la autoridad de tránsito accionada, y la respuesta que dicha entidad brindó mediante oficios SDC-202342103891051 y SDC-202342100094333 de 11 de abril de 2023, notificados a la interesada, no observó manifestación, ni positiva ni negativamente, frente a la petición 5.2.3. mediante la cual la actora solicitó copia del acta de audiencia, lo que a su juicio constituyó una respuesta evasiva, vulnerando así el derecho fundamental de petición de la accionante.

En relación con la configuración del silencio administrativo positivo aducido por la actora, indicó que este es de competencia de la jurisdicción

contencioso administrativa, sin que, además, este se torne procedente frente a peticiones de revocatoria de un acto (art. 96 Ley 1437 de 2011); por lo tanto, el objeto la tutela no es el de reemplazar a los medios judiciales ordinarios con los que cuentan los ciudadanos, menos si no se advierte un perjuicio irremediable.

Por lo anterior, concedió la protección del derecho de petición de la tutelante y ordenó a la Secretaría de Movilidad dar respuesta de fondo a la petición 5.2.3 contenida en derecho de petición de fecha 28 de febrero de hogano.

3. LA IMPUGNACIÓN

Dentro del término legal, la parte accionada impugnó la sentencia de primera instancia, manifestando, en síntesis, que mediante oficio SDC-202342103891051 del 11/04/2023, notificado a la accionada en su dirección electrónica, se pronunció frente a la solicitud de “acta de la audiencia realizada” contenida en el punto 5.2.3. de la petición, indicando que se accedía a la misma y se remitía copia de la resolución respectiva, por lo que la conclusión del despacho primigenio al afirmar que ese organismo no se pronunció ni positiva respecto de ese requerimiento, resulta errónea, pues que el documento remitido denominado “resolución” tiene las mismas características de un acta de audiencia, situación que podía evidenciarse claramente con una somera lectura del documento anexado como prueba.

No obstante lo anterior, indico que en cumplimiento del fallo de tutela, mediante oficio SDC 202342104158581 del 26 de abril del año en curso, remitió la documentación requerida por el despacho, indicando que: *“La presente Autoridad de Tránsito informa que el ACTA DE AUDIENCIA requerida en este punto, corresponde al documento entregado como Resolución No. 509910 de fecha 23 de marzo de 2023, toda vez que la audiencia de fallo de que trata el inciso 6 del artículo 136 del C.N.T.T. se realizó de manera presencial y el documento que respalda su realización en la resolución 509910 ibídem suscrita por la Autoridad de Tránsito de conocimiento que la expidió.”*

Por lo tanto, como abordó y respondió las peticiones de la actora en el transcurso de la acción de tutela, debió declararse la existencia de un hecho superado, solicitando así la revocatoria de la sentencia de primer grado.

4. CONSIDERACIONES

4.1. Sea lo primero señalar, que conforme al artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a la vulneración o amenaza por la acción u omisión de las autoridades públicas, y en algunos casos de los particulares, siempre que no se disponga de otra vía judicial expedita para ello, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable al tenor de lo preceptuado en los artículos 1º, 5º y 8º del Decreto 2591 de 1991.

4.2. El presente trámite se inició fundamentalmente por la presunta vulneración de los derechos de petición y al habeas data. Frente al primero, el artículo 13 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el canon 1º de la Ley 1755 de 2015 *-por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-*, y el cual se acompaña con lo previsto en la norma 23 Superior, lo ha definido como el que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, con miras a obtener una pronta resolución, advirtiéndose, además, por vía jurisprudencial que a diferencia de los términos o procedimientos judiciales, esta protección fundamental es una vía expedita de acceso directo a las autoridades, y aunque su objetivo no incluye la exigencia de una resolución en un sentido determinado, sí intima para que exista un pronunciamiento oportuno y concreto frente a la reclamación que se invoca.

Por otro lado, conforme lo establece el artículo 14 del CPACA, modificado por la citada Ley, salvo norma especial, las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Asimismo, y conforme al párrafo de dicho canon normativo, en caso de no resolverse la petición dentro del lapso citado *"la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado (...) expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo en que se resolverá o dará repuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto"*.

Adicional a lo anterior, recuerda esta judicatura que, conforme a los lineamientos antes expuestos, el término de 15 días con que originalmente

contaban las entidades, para resolver la petición formulada, dicho plazo fue ampliado conforme a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020, expedido por el Gobierno Nacional con ocasión al estado de emergencia sanitaria decretado, por lo que el estudio de las peticiones causa de la acción de amparo debían responderse dentro del término de 30 días. Posteriormente, mediante la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, se derogó el precepto 5º antes mencionado, por lo que a partir del día siguiente de la promulgación de esa norma, el término para resolver las peticiones, volvió a ser de 15 días.

4.3. En el caso concreto, en efecto, se encuentra acreditada la radicación del derecho de petición presentado por la accionante en la Secretaría de Movilidad de esta ciudad, del cual presuntamente no había obtenido respuesta. Sin embargo, de acuerdo con la respuesta allegada en el archivo 007 del expediente digital, se observa la contestación mediante oficio SDC 202342103891051 del 11 de abril de 2023, con el cual el Organismo de tránsito abordó cada uno de los pedimentos de la demandante, refiriéndose frente a las solicitudes de revocatoria directa, asignación de cita para audiencia dentro del proceso contravencional y remitiendo la documentación requerida.

En ese punto vale precisar que, aunque el *a quo* refirió que la petición contenida en el numeral 5.2.3. mediante la cual la actora solicitó copia del acta de audiencia no fue atendida por la accionada, advierte esta judicatura todo lo contrario, pues frente a ese requerimiento la Secretaría de Movilidad indicó:

RESPUESTA AL PUNTO 5.2.2 Y 5.2.3

“Copia de la resolución en la que resuelve la presunta infracción”

“Acta de la audiencia realizada”

Se accede a su solicitud, por lo cual se remite copia de la resolución respectiva.

(Cfr. Pág. 55 archivo 007)

Asimismo, con la comunicación SDC 202342103891051 del 11 de abril de 2023 antes referida, fue suministrado copia del escrito con encabezado ***“EXPEDIENTE No.509910 COMPARENDO No. 37460231 FECHA COMPARENDO: 02/04/2023 INFRACCIÓN: C29 PROPIETARIO: LUZ ANDREA LONDOÑO ALVAREZ CEDULA DE CIUDADANÍA No.1020756304 VEHÍCULO PLACA:MAU065 SERVICIO:PARTICULAR”*** (negrilla en el texto original), que con su simple lectura puede extraerse que se trata del acta de audiencia celebrada el

pasado 23 de marzo de 2023 dentro del proceso contravencional formulado contra la actora (pág. 62 a 71 ib.)

Además, el oficio referido fue remitido el 12 de abril de 2023 a la dirección electrónica fratrulon@gmail.com, a través de empresa de mensajería, la cual certificó su acuse de recibo (pág. 23 y 24 archivo 012), por lo que es claro que el derecho de petición presentado por la actora fue atendido y contestado por el ente accionado, quien, en el transcurso del presente trámite preferente y sumario, remitió respuesta al buzón electrónico suministrado por ella para efectos de sus notificaciones personales, tanto en la petición como en el escrito de tutela.

Lo anterior permite concluir que, con oportunidad de la interposición de la presente acción, las pretensiones de la tutelante fueron atendidas, razón que permite establecer que ha cesado la vulneración a la garantía fundamental invocada, configurándose así la carencia actual de objeto por hecho superado, figura respecto de la cual, la Corte Constitucional, ha expresado:

“La jurisprudencia constitucional ha establecido que en caso de que al momento de fallar se advierta que la acción u omisión que dio origen a la pretensión de tutela ha cesado, el pronunciamiento del juez de tutela carece de objeto, pues la amenaza o vulneración de derechos fundamentales que antes se alegaba se torna inexistente. Por tanto, el operador judicial se encuentra ante la imposibilidad de emitir alguna orden en pro de proteger las garantías fundamentales que en principio se consideraron afectadas.

Lo anterior puede ocurrir en tres supuestos, a saber: (i) el hecho superado; (ii) el daño consumado, o (iii) cualquier otra situación que conduzca a que carezca de sentido la orden a dictar para satisfacer la pretensión de la solicitud de tutela.

Al referirse al hecho superado, el Tribunal ha indicado que es aquella situación que se presenta cuando durante el trámite de la tutela o de su revisión, cesa la vulneración o amenaza del derecho que se buscaba proteger con la solicitud de tutela como consecuencia de una actuación por parte del demandado. En consecuencia, el accionante, en principio, ya no tiene interés en la satisfacción de su pretensión pues la causa que motivó la solicitud de tutela ha desaparecido”¹

5. CONCLUSIÓN

Lo anterior conlleva a revocar la sentencia impugnada, atendiendo a que la vulneración alegada cesó en el curso del trámite constitucional, y por lo mismo, comprobarse la existencia de un hecho superado.

¹ Corte Constitucional, sentencia SU453 de 2020.

6. DECISIÓN DE SEGUNDO GRADO

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Veinticinco Civil del Circuito de este Distrito Capital de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución,

RESUELVE

6.1 Revocar el fallo de tutela proferido el 24 de abril de 2023 por el JUZGADO 78 CIVIL MUNICIPAL hoy 60 DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE BOGOTÁ, por lo expuesto en la parte motiva de esa decisión.

6.2. Negar el amparo deprecado por LUZ ANDREA LONDOÑO ÁLVAREZ contra SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ, conforme a lo antes indicado.

6.3. Notificar esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito.

6.4. Remitir las diligencias a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase
El Juez,

LUIS AUGUSTO DUEÑAS BARRETO

DLR

Firmado Por:

Luis Augusto Dueñas Barreto
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 025
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **22856ed998396d00396c448755e16aba452ea090a653c3d190dd69e6c34301dc**

Documento generado en 08/06/2023 11:03:16 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>